

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatan, por el C. Vicente Fernandez, contra el C. Coronel José M. Alcocer que le mandó dar cien palos y lo conserva preso con infraccion de varios artículos constitucionales.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Firme en su propósito el C. Coronel José Matilde Alcocer, de no prestar obediencia á los autos que provee V. en los juicios de amparo que se promueven contra los atentados que ha cometido, como encargado del Ejecutivo del Estado, en los pocos dias que lleva de ejercer este poder, pretesta ignorar el hecho apenas creíble, que reclamaba contra él el C. Vicente Fernandez, de haber sufrido un banco de cien palos que aquel Gobernante le mandó aplicar; y el no menos inverosímil, de que tras esta cruel flagelacion lo mantenga preso sin formalidad alguna que legalise este acto, del cual surge la queja del paciente, fundada en los artículos 16 y 22 de la Constitucion federal, para negarse á cumplir el proveido de la inmediata suspension, y á dar el informe que sobre lo principal del ocurso le pidió V. Esta ignorancia que difícilmente puede presumirse en el C. Coronel José Matilde Alcocer, no puede excusarlo de informar sobre esos hechos reclamados, por que si realmente los ignoraba, debió haber procurado investigar su existencia y la del autor, aunque no fuera mas que para castigar severamente al que con tan fea nota se atreve á manchar la historia de su gobierno, y decir á V. lo que hubiese de cierto en la version de Fernandez, ó desmentirla por completo si esta era de todo punto falsa.

Pero la indiferencia con que segun parece ha recibido el C. Alcocer la noticia de las vejaciones sufridas por uno de sus infelices gobernados, revela que los hechos re-

feridos son verdaderos y que por no justificarlos de modo alguno ha preferido guardar acerca de ellos el mas profundo silencio, mal escusado con la ignorancia del que no ha negado ser su mismo autor, apesar de que le ha sido hecha por la víctima, tan amarga imputacion. En este concepto, y en el de que contra el banco de palos no cabe ya amparo por ser un acto consumado contra el artículo 22 del Código fundamental de la República, que el C. José Matilde Alcocer acaba de protestar solemnemente guardar y hacer guardar, el infrascripto tiene que limitarse al hecho de la prision en que permanece el quejoso, hace mas de diez dias sin auto motivado que la justifique, y sin que conste la competencia de la autoridad que la haya ordenado. Y como en tal caso se violan las garantías que otorgan al individuo los artículos 16 y 19 de la Constitucion federal, el infrascripto pide á V.

Primero: sentencie en definitiva este juicio, con fundamento de los citados preceptos constitucionales y del artículo 1º fracción 1ª de la ley orgánica de 20 de Enero de 1869, declarando: que la Justicia de la Union ampara y protege al C. Vicente Fernandez, contra el acto de su prision ordenada por el C. José Matilde Alcocer como encargado del poder Ejecutivo de este Estado.

Segundo: que se de aviso al Congreso nacional de no haber obedecido el auto de suspension proveido el 4 del corriente, puesto que con el expresado carácter goza de fuero constitucional, y debe cumplirse con lo que para este caso previene el artículo 21 de la citada ley reglamentaria.

Tercero: que se eleve este expediente original á la Suprema Corte de Justicia para su revision; sin perjuicio de mandar V. publicar la sentencia final que en él se sirva pronunciar.

Mérida, Febrero 7 de 1874.—P. Hijuelos.

Sentencia del C. Juez de Distrito.

Mérida, Febrero 9 de 1874.—Visto este juicio de amparo promovido por el C. Vicente Fernandez, contra el C. Coronel José Matilde Alcocer, que con el carácter de encargado del poder Ejecutivo del Estado le mandó aplicar un banco de cien palos y lo tiene preso hace mas de diez dias con infraccion de los artículos 16, 19 y 22 de la Constitucion federal. Visto el auto de suspension del acto reclamado; el informe del C. Coronel contra quien se pide el amparo; el dictámen fiscal; la citacion para sentencia con cuanto mas ver y tener presente conyino.

Considerando: que el actor funda su queja en que el C. Alcocer, sin autoridad alguna, le ha hecho sufrir un banco de cien palos y lo tiene en prision hace mas de diez dias, negándole el carácter de encargado del poder Ejecutivo con que ha ordenado semejantes actos vejatorios.

Considerando: que á este respecto hay que tener presente que el C. Coronel Alcocer, si bien á la fecha en que mandó dar los palos y ordenó la prision del C. Fernandez, se reputaba encargado del poder Ejecutivo, como Consejero de gobierno, de cuyo empleo fué privado por el decreto número 4 que se registra en el impreso que vá por cabeza, expedido en 16 del mes próximo pasado por la Honorable Legislatura; despues lo mantiene en prision como Vicegobernador en ejercicio del mismo poder Ejecutivo, alegando tambien el quejoso la ilegalidad con que se ostenta como tal, desde el dia 1º del corriente.

Considerando: que por el propio decreto número 4 de 16 de Enero último, se mandaron suspender las elecciones de los Poderes Ejecutivo y Judicial que debian verificarse el 20 de dicho mes, las cuales no se verificaron en cumplimiento del decreto, y porque no se hicieron los trabajos previos, en virtud de que los ayuntamientos quedaron desorganizados por no haber hecho los mas la protesta á las reformas y adiciones constitucionales.

Considerando: que aunque sin embargo de no haberse verificado las elecciones, se ha declarado Vicegobernador al C. Alcocer por una fraccion de diputados; esta fraccion no ha podido formar Congreso, como ha resuelto ya este Juzgado en el amparo solicitado por los CC. Clotilde Baquero, Rafael Bollo, L. Gamboa y Lic. José Dionisio Gonzalez, á quienes ha pretendido juzgar, citándose en Gran Jurado la referida fraccion de diputados.

Considerando: que por lo expuesto no se puede reconocer en el C. Alcocer legalmente el encargo de Vicegobernador en ejercicio del poder Ejecutivo, habiendo infringido por tal motivo en la persona del quejoso, el artículo 22 de la Constitucion federal, con el banco de cien palos que le mandó dar, y que si bien una vez dados son irremediables, no por eso su perpetracion deja de ser un hecho contra la Constitucion, de grave responsabilidad para el que lo cometi6, habiendo infringido tambien en la persona del quejoso el artículo 16 constitucional por haberlo reducido á prision sin tener autoridad alguna para ello; y como la prision ha durado mas de tres dias sin auto motivado, resulta que tambien ha violado el artículo 19 en la persona de Fernandez.

Considerando: que el referido Alcocer no niega los hechos de la queja del actor, ni podria negarlos, porque han pasado á la luz del dia y públicamente; y á pesar de esto no ha cumplido con la suspension del acto reclamado.

Por estos legales fundamentos, y de conformidad con el parecer fiscal, fundado en el artículo 1º fraccion 1ª de la ley de 20 de Enero de 1869, la autoridad en nombre de los Supremos poderes, falla.

Primero: La Justicia de la Union ampara y protege al C. Vicente Fernandez, contra los actos del C. Coronel José Matilde Alcocer, que sin autoridad ninguna le ha mandado aplicar un banco de cien palos, y lo tiene reducido á prision hace mas de diez dias, con infraccion de los artículos 16, 19 y 22 constitucionales.

Segundo: Queda á la resolucion de la Suprema Corte de Justicia la conducta del C. Alcocer, quien suponiéndose encargado del poder Ejecutivo, carece de Superior inmediato para requerirlo, para que cumpla con la suspension del acto reclamado, que se niega á cumplir en los juicios de amparo, y que no se le encausa desde luego, conforme al artículo 22 de la ley orgánica, por carecer de apoyo este Juzgado para hacer efectivas sus determinaciones.

Tercero: Sáquese testimonio de este fallo para publicar, y clóvense los autos en revision, á la Corte Suprema de Justicia de acuerdo con los artículos 13 y 27 de dicha ley orgánica. Hágase saber.—*I. Manzanilla.*—Ante mí.—*José Anacleto Castillo.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo 25 de 1874.—Visto este recurso de amparo interpuesto por el C. Vicente Fernandez vecino de Yucatan, contra los actos del Coronel José M. Alcocer que le mandó aplicar cien palos y lo conserva preso con infraccion de los artículos 16, 19 y 22 de la Constitucion federal; visto el informe de Alcocer; el parecer fiscal; el fallo del inferior que otorgó el amparo solicitado; y

Considerando: que dividida en dos fracciones la H. Legislatura de Yucatan, la una compuesta de cinco diputados y la otra de nueve, la primera, contando solo con el apoyo de la fuerza armada, continuó ocupando el salon de sesiones y llamándose 5ª Legislatura constitucional del Estado; que esta fraccion de cinco diputados no ha podido legalmente instalarse, ni funcionar como Legislatura, por carecer de los requisitos exigidos en el artículo 29 de la Constitucion particular del Estado, ni mucho menos expedir leyes, decretos, ni aun tomar acuerdo alguno, por prohibirlo el artículo 43 de la misma Constitucion.

TOMC V.—PARTE II.

Que por lo mismo no pudo legalmente la repetida minoría declarar á persona alguna revestida de autoridad constitucional, siendo nula en rigurosa consecuencia la declaracion que hizo en favor del C. José Matilde Alcocer, de Vicegobernador constitucional del Estado.

Que está plenamente probado que el C. Vicente Fernandez, fué reducido á prision por el C. Alcocer cuando ejercía este el poder Ejecutivo, como consejero de gobierno, apesar de haber sido depuesto de este encargo por la Legislatura, en virtud de un decreto de 16 de Enero del corriente año, y que así mismo fué retenido en prision por el referido Alcocer, ejerciendo funciones de Vicegobernador por declaracion que á su favor hizo la repetida minoría de la Legislatura.

Que aun tratándose de autoridad legítima procedería el amparo, por violacion del artículo 19 de la Constitucion federal, puesto que la prision excedió del plazo de tres dias que puede durar, sin darse el auto motivado de prision.

Que estos hechos constituyen violacion de las garantías consignadas en los artículos 16 y 19 de la Carta fundamental de la República; que el banco de cien palos de cuya aplicacion se queja Fernandez, importa un delito contra la Constitucion federal, que debe averiguarse y perseguirse de oficio.

Por estos fundamentos, la Justicia de la Union decreta: que es de confirmarse y se confirma por sus propios legales fundamentos la sentencia del C. Juez de Distrito de Yucatan que ampara y protege al C. Vicente Fernandez, contra el acto de retenerlo en prision el C. Coronel José Matilde Alcocer. Y en cuanto al segundo punto, el Juez procederá con arreglo á la ley, bajo su responsabilidad.

Devuélvase las actuaciones al Juzgado de su origen, acompañándole testimonio de la sentencia para los efectos consiguientes; archivándose á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron

los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—*José María Iglesias.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*Pedro Ordaz.*—*Ignacio Ramírez.*—*Manuel de Castañeda y Nájera.*—*Ignacio M. Altamirano.*—*S. Guzman.*—*Luis Velasquez.*—*M. Zavala.*—*Enrique Landa*, secretario.

Es copia que certifico. México, 15 de Abril de 1874.—*Alejo Gomez Eguiarte*, oficial mayor segundo.

AMPARO

Promovido ante el Juzgado de Distrito del Estado de Tabasco, por D^a Petrona Castillo, contra el Juez de 1^a instancia de la Sierra, que nombró á D. Miguel D. de Estrada, curador de los menores nietos de la quejosa.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

El Promotor fiscal dice: que en el ocurso presentado por D^a Petrona Castillo no vé un uso legal, sino un abuso del recurso de amparo, con que se pretende hacer á un lado á las autoridades del Estado que deben conocer del caso, y ademas que no se oiga á su contraparte. La cuestion que tiene pendiente es esta. ¿Es válido el nombramiento de curador hecho á sus dos nietos menores? ¿Debe prevalecer á la disposicion que dice hizo su hija al fallecer, ó por el contrario, esta á aquel, ó ninguna de las dos cosas?

Esta es cuestion que debe decidirse por las autoridades del Estado con audiencia de las partes interesadas; y mal podrá decidirse, cuando aun no se ha propuesto, según asienta la autoridad informante; menos pueden resultar violadas las garantías que invoca, y menos todavía considerar urgente

una solicitud para cuya sola interposicion tan mal y tan fuera de su lugar gastó la solicitante, segun dice, nada menos que el espacio de once meses. Por todo lo cual, el Promotor fiscal concluye pidiendo á V. se sirva denegar á D^a Petrona Castillo el amparo que solicita.

San Juan Bautista, 24 de Febrero de 1874.—*Lic. Cordero.*

Es copia que certifico. San Juan Bautista, Marzo 3 de 1874.—*Gabriel Sosa.*

Sentencia del C. Juez de Distrito.

San Juan Bautista, Febrero 27 de 1874.—*Vistos:* el ocurso que obra por cabeza, presentado por Petrona Castillo, en que solicita amparo contra un acto del C. Juez de 1^a instancia de la Sierra, por el cual este funcionario nombra al C. Miguel D. de Estrada curador de los menores Antonio y Lauriana, nietos de la quejosa, alegando que con este hecho se violan en su perjuicio los artículos 5º y 16 de la Constitucion nacional; el informe de la autoridad en que se declara la realidad de tal nombramiento; el pedimento del C. Promotor en que pide la denegacion del amparo, y todo lo demas que ver convino. Considerando: que en el hecho de haberse provisto de curador á los enunciados menores, no hay violacion del artículo 5º, supuesto ser ese un acto autorizado por las leyes, y muy lejos del alcance del referido artículo; que tampoco la hay del artículo 16, por cuanto la autoridad que dictó aquella providencia, era competente al efecto, por lo cual si bien ese acto podría resentirse de vicios y nulidades bajo otros respectos, no envuelve la violacion de garantías que la querellante alega, y que no siendo este Tribunal el competente para declarar tales vicios y nulidades, la parte ha debido usar de los medios ordinarios que las leyes le franquean á fin de que mediante los trámites comunes y con la debida